



Hay intentos oficiales de dar carpetazo a casos de desaparecidos

2012-10-14- Derechos Humanos



Sanjuana Martínez, Periódico La Jornada

Juana Solís Barrios no sabía qué hacer cuando la Procuraduría de Justicia de Nuevo León le dijo que había encontrado a su hija, Brenda Damaris González, desaparecida el 31 de julio del año pasado. "Está muerta, la encontramos hace un año, pero hasta ahora tenemos las pruebas de ADN", dijo la jefa del Laboratorio de Genética Forense.

"¿Dónde la tienen?", preguntó ella a punto de desvanecerse por el impacto emocional. "Está en una bolsa. ¿Para qué la quiere ver? Mejor conserve su recuerdo de cuando vivió con ella, porque se va a llevar un fuerte impacto", le contestó la funcionaria de la procuraduría de Nuevo León y le entregó solamente una acta donde se le notificaba la entrega de 166 fragmentos.

"No me enseñaron ni las fotos de los restos, tampoco me permitieron ver la bolsa, mucho menos abrirla. ¿Qué hacía? ¿Era o no mi hija? Pensé que cualquier ser humano merecía una santa sepultura. Decidimos enterrarla, aunque no sea mi hija. No me entregaron el expediente con las supuestas pruebas de ADN, ni me dijeron la forma en que murió, ni cómo la encontraron, nada... Mi corazón de madre me dice que mi hija no está en esa bolsa".

Con la mirada perdida, Juana Solís permanece rodeada de su familia. Dice que no puede llorar. Vive en una diminuta casa de interés social, en un cerro desértico del

municipio de García, Nuevo León, una zona controlada por Los Zetas y donde han desaparecido decenas de mujeres jóvenes, como su hija, quien tenía 25 años. Su familia acudió al llamado por el supuesto hallazgo de Brenda Damaris. Están sentados afuera de la vivienda y en la sala. Todos en fila, en silencio, desconcertados; sin saber si lloran o no.

"No siento que sea mi hija, mi corazón me lo dice. Yo voy a seguir buscándola", comenta con seriedad mientras espera en el anfiteatro la llegada de los restos. Su hermana, Irma, recibe la pequeña bolsa negra de plástico, cuyo contenido es extendido en una plancha de acero inoxidable: "Son puros huesos llenos de tierra y sólo la parte de atrás del cráneo. ¿Cómo es posible que la hayan encontrado tres meses después de desaparecida y no me entreguen su ropa o su cabello?... No les creo nada".

"Voy a enterrarla aunque no sea mi hija"

Dos días antes, Juana Solís se había enfrentado verbalmente a un grupo de militares que descubrieron una fosa clandestina en La Huasteca, donde había varios cuerpos: "Llevaba mi manta con la foto de Brenda Damaris y me detuvieron y me dijeron que me iban a arrestar porque llevaba una narcomanta, y que eso era delito. Es muy sospechoso que dos días después me digan que encontraron a mi hija".

En el cementerio de García los familiares de la joven van llegando con la misma confusión. Fue un breve servicio, con prisas, sin funeral, ni flores. El Ministerio Público obligó a la funeraria a llevar el féretro directamente al panteón: "Voy a enterrarla aunque no sea mi hija. Pero a mí no me van a callar; soy muy terca y no me dejo de nadie. Voy a seguir luchando hasta encontrar a mi hija, me tope con quien me tope".

Carpetazos

Recientemente, este tipo de entrega de restos a familiares de desaparecidos ha llamado la atención de Ana María Talavera, integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad: "En este fin de sexenio están queriendo dar carpetazo a los asuntos. Estas resoluciones sobre entrega de restos es totalmente absurda, incongruente y cínica. No tienen escrúpulo alguno de entregar restos con tal de callar a las víctimas".

Esta profesora de literatura inglesa de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que también perdió un hijo de forma trágica, se unió a la búsqueda de la verdad con el movimiento dirigido por Javier Sicilia y ha recorrido el país exigiendo justicia para los miles de desaparecidos y asesinados de la guerra.

La forma en que la Procuraduría de Justicia de Nuevo León, a cargo de Adrián de la Garza, ha entregado los supuestos restos de Brenda Damaris González Solís le ha causado una profunda indignación: "La encontraron supuestamente tres meses después de desaparecer. ¿Por qué no le dieron aviso a la familia? Si sacaron fotos, ¿por qué no las muestran?; si analizaron el ADN de los restos, ¿por qué no está el parte médico forense? Ni siquiera les han dicho la causa de la muerte".

En México no existe un banco nacional de datos para cruzar pruebas de ADN con los más de 10 mil cadáveres sin identificar que hay en el país. Y la organización no gubernamental critica la falta de protocolos de las autoridades para conducirse en términos de identificación de desaparecidos: "Evidentemente esta entrega de restos es una mentira, no podemos tragarnos una cosa así. A todas luces es mentira".

En este caso, Juana Solís hizo todos los trámites, pero sin ningún representante de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac), que confirmó y aceptó la versión de la procuraduría de que habían encontrado los restos de tres personas desaparecidas.

Además de Brenda Damaris, su amigo Julio César Santos Domínguez, y Perfecto Guzmán Campos: "Es terrible. Hay muchas incongruencias. Cadhac no está ayudando a todas las víctimas. A la desaparición del hijo hay que añadir la respuesta cínica de las autoridades y luego esta mentira. ¿A dónde van a ir a dar todas las víctimas? Es indignante. Hay muchas incongruencias".

Feminicidios sin alerta

El 31 de julio del año pasado, Brenda Damaris volvía con un amigo en una camioneta y tuvieron un accidente en Santa Catarina, Nuevo León. La joven habló a su madre comunicándole lo sucedido y le explicó que ya había agentes de tránsito de ese municipio y que pronto llegaría a casa. Pero nunca llegó. La camioneta fue encontrada con cinco impactos de bala, llevada a un corralón y luego desapareció al igual que sus ocupantes.

Juana Solís está segura que en la desaparición de su hija están involucradas autoridades de Santa Catarina, vinculadas con un grupo criminal que ha sido identificado en la red de trata de mujeres en distintos municipios y en estados del norte de la República.

Nuevo León es uno de los centros neurálgicos de trata de mujeres, feminicidios y desaparecidas, según comenta Irma Alma Ochoa, directora de Artemisas por la Equidad, organización que ha contabilizado 118 feminicidios durante 2012, de los cuales 50 por ciento fue en Monterrey.

"Los ciudadanos tenemos la percepción de que las autoridades quieren archivar los expedientes por la sobrecarga de casos, ante el aumento de la violencia contra las mujeres", dice Irma Alma Ochoa al señalar que de los 118 feminicidios, 40 siguen sin ser identificadas, lo cual hace pensar que se trata de desaparecidas; migrantes en tránsito o bien mujeres en situación de trata con fines de explotación sexual o laboral.

El incremento de asesinatos de mujeres y desaparecidas es alarmante, mientras el gobierno de Rodrigo Medina se niega a aceptar la alerta de género y existe un amparo federal para conseguirla: "Hay además una cifra negra de casos que no salen a la luz pública. Es muy grave. De los 118 crímenes de mujeres, a más de 75 se les infligieron lesiones infamantes y mutilaciones; fueron torturadas, apedreadas, baleadas, apuñaladas, violadas, calcinadas, decapitadas o descuartizadas. La mayoría fueron secuestradas y sus cuerpos expuestos en la vía pública. Aunque el gobierno la rechace, la alerta de género es urgente y conviene a todos. Al final, son las mujeres asesinadas y desaparecidas las que están moviendo al sistema".

En tanto, Juana Solís prepara ya los complicados trámites para la exhumación de los restos que acaba de enterrar, a fin de conseguir una segunda prueba de ADN, en un laboratorio privado para determinar de manera contundente si realmente es Brenda Damaris: "Estoy destrozada, pero esto sólo acaba de empezar", sentencia.

